

Santiago, siete de julio de dos mil veinticinco.

Vistos:

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, por sentencia de diecisiete de abril de dos mil veinticinco, en la causa RIT 570-2023, RUC 2.300.327.345-8, condenó a Jean Pierre Humberto Olmos Olmos a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo y al pago de una multa de diez unidades tributarias mensuales, en calidad de autor de un delito de tráfico ilícito de estupefacientes, en grado de consumado, sorprendido en el sector de Avenida Viña del Mar, toma "Felipe Camiroaga", Forestal, Viña del Mar, el 24 de marzo de 2023.

En contra de dicho fallo, la defensa del sentenciado recurrió de nulidad, arbitrio que se conoció en la audiencia pública de diecisiete de junio pasado, convocándose a los intervinientes a la comunicación de la sentencia para el día de hoy, como consta en el acta respectiva.

Considerando:

1º) Que, el arbitrio recursivo se asila de manera primordial, en la causal de nulidad prevista en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal.

Expone que, en la audiencia de control de detención y de formalización de la investigación, la defensa incidentó la legalidad de la detención toda vez que se habría verificado una vulneración a las garantías fundamentales del acusado, en específico, su libertad ambulatoria. Lo anterior obedece al hecho de que, el transitar por las afueras de su domicilio, portando una bolsa de basura, correspondió a una conducta neutra que no habilita a los funcionarios policiales para efectuar un control de identidad.

Por lo anterior solicita invalidar la sentencia y el juicio oral y se disponga la realización de un nuevo juicio oral.

Como primer capítulo subsidiario de invalidación, la defensa propone el motivo absoluto de nulidad previsto en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal afirmando que, en la sentencia que impugna, se incurre por parte de los



sentenciadores en una grave infracción a las reglas de la lógica, respecto del principio de razón suficiente.

Expone que los sentenciadores del fondo no consideraron lo declarado por el acusado, en torno a que el porte de la planta de marihuana se encontraba justificado desde el punto de vista terapéutico, por cuanto el acusado sufre de déficit atencional e hiperactividad.

Por lo anterior, pide la invalidación de la sentencia y del juicio oral que la precede, y se disponga la realización de un nuevo juicio oral ante tribunal no inhabilitado.

En subsidio de lo anterior, postula la causal de nulidad prevista en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal. Explica que la norma erróneamente aplicada corresponde al artículo 3°, en relación con el artículo 1°, ambos de la Ley 20.000. Afirma que, la defensa, en subsidio de la petición de absolución, solicitó que los hechos se recalificasen al delito tipificado en el artículo 8°, en relación con el artículo 50 de la Ley 20.000. Lo anterior fundado en que el imputado, en su declaración, reconoció haber mantenido una planta de marihuana en su domicilio y que, el día de los hechos la cosechó y la llevó a la casa de un amigo. Tal alegación obedeció a que no se encontró elemento alguno que lo vinculara con la venta de dicho alcaloide y, que tanto las plantas como el producto de la cosecha hallado en su poder, estaban destinados a su consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo.

Expone que, de haberse aplicado correctamente las normas que cita, en caso de haber existido una condena, esta debió imponer las penas establecidas en el artículo 50 de la Ley 20.000; o en subsidio, en atención a las circunstancias alegadas, imponer la pena contenida en el artículo 8° del mismo texto legal y, en atención a lo dispuesto en su inciso final, rebajar la pena en un grado desde el mínimo, estableciendo al efecto una pena no superior a quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, por lo que solicita se anule únicamente la sentencia, y dicte sentencia de reemplazo de acuerdo a lo expuesto;



2º) Que, en lo concerniente a los hechos que fundaron la acusación del Ministerio Público, el motivo decimotercero de la sentencia impugnada tuvo por acreditado: *“...1º.- Que el 24 de marzo de 2023, alrededor de las 16:20 horas, en Avenida Viña del Mar, sector de la toma Felipe Camiroaga, Forestal, Viña del Mar, funcionarios de Carabineros procedieron a realizar un control preventivo de identidad al acusado Jean Pierre Humberto Olmos Olmos, quien no portaba su cédula de identidad y tenía en las manos una bolsa de basura color negra de la cual emanaba un fuerte olor a marihuana y se podía ver una rama de una especie vegetal, similar a la Cannabis Sativa, por lo que se realizó un registro de la bolsa negra, en cuyo interior portaba una rama de Cannabis Sativa de alrededor de un metro de altura y 346,2 gramos netos marihuana a granel en una bolsa roja, así lo relataron los funcionarios de Carabineros que participaron en el procedimiento Paulo Alejandro Leal Vega y Orietta Joaquina Sánchez Saavedra.*

2º.- *La sustancia que mantenía en su poder el acusado, al interior de las bolsas de plástico que portaba, correspondía a 346,2 gramos netos de Cannabis Sativa, dosificada en una bolsa de nylon roja, consistente en ramas y sumidades floridas húmedas y la rama de Cannabis Sativa, contenida en una bolsa de plástico negra que pesaba 1005,8 gramos neto, consistente en ramas y hojas en estado húmedo, según el informe pericial respectivo del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, y al Acta de Recepción de ese mismo Servicio, así también se estableció los efectos nocivos para la salud pública de dicha sustancia, con el informe respectivo.*

3º.- *La droga antes indicada, por su cantidad, forma en que estaba dosificada, en una bolsa plástica, sin dosificar, unido a la presencia de una rama de una planta de marihuana, de alrededor de un metro de largo, permite concluir que la droga estaba destinada a su comercialización y/o transferencia de terceros, sin que se justificara de forma alguna que esa droga, por su cantidad y forma de dosificación estuviera destinada a su uso o consumo personal, exclusivo y*



próximo en el tiempo, debiendo tenerse presente que el acusado fue sorprendido en el la vía pública portando la droga”.

Estos hechos fueron calificados por el tribunal como constitutivos del delito de tráfico ilícito de estupefacientes —cannabis sativa—, en grado de desarrollo consumado, previsto y sancionado en el artículo 3°, en relación con el artículo 1°, de la Ley 20.000.

En torno a lo afirmado en el recurso de nulidad, el fundamento decimocuarto del fallo impugnado estableció, con relación a la calificación jurídica de los hechos que, *“...la unión lógica y sistemática de los hechos consignados en el fundamento séptimo de este fallo, y el análisis libre de toda la prueba ya reseñada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 297 del Código Procesal Penal, importan para el Tribunal la calificación jurídica de los mismos, dentro de la figura del delito de Tráfico ilícito de estupefacientes (cannabis sativa), cometido en grado de consumado, previsto y sancionado en el artículo 3°, en relación con el artículo 1°, de la Ley número 20.000, sorprendido en Avenida Viña del Mar, toma Felipe Camiroaga, Forestal, Viña del Mar, el 24 de marzo de 2023, alrededor de las 16:20 horas.*

Se han calificado los hechos en la forma antes indicada, teniendo en consideración, la cantidad y naturaleza de la droga decomisada, marihuana, así como su dosificación 346,2 gramos netos de marihuana en una bolsa plástica, a lo que se suma la presencia de una rama de la misma especie, lo que permite concluir que la droga no estaba destinada al uso o consumo personal, exclusivo o próximo en el tiempo, a lo que se suma que el acusado fue sorprendido portando la droga en la vía pública.

Por lo anterior, el ilícito se encuentra en grado de consumado, al haberse establecido que el acusado mantenía en su poder la droga antes indicada”.

Por su parte, el fundamento decimosexto del fallo en revisión estableció que, *“...la Defensa no cuestionó la existencia de la droga en poder del acusado en la vía pública, indicando que de igual forma se le debía absolver, por cuanto no*



existe ningún indicio que la droga estuviera destinada a su comercialización y con ello pusiera en peligro de la salud pública, en subsidio, se recalificaran los hechos a Cultivo del artículo 8° de la Ley N°20.000.

En relación a la calificación jurídica de los hechos y la responsabilidad del acusado, debe estarse a lo señalado en los fundamentos, decimotercero, decimocuarto y decimoquinto, en que se tuvo por acreditado el delito de tráfico ilícito de Cannabis Sativa, y la responsabilidad que le correspondió al acusado.

Respecto de las circunstancias del hallazgo, esto es, a partir de un control preventivo de identidad, se debe señalar que el artículo 12 de la Ley 20.931 autoriza expresamente el control de identidad por parte de las policías, sin necesidad de algún indicio, como ocurre con el artículo 85 del Código Procesal Penal, y en este caso el acusado no portaba su cédula de identidad, momento en que la funcionaria de Carabineros Orietta Joaquina Sánchez Saavedra, se percató del olor a marihuana y de la rama que sobresalía de la bolsa de basura negra, por lo que el procedimiento se transformó en un control investigativo, conforme lo dispuesto en el artículo 85 del Código Procesal Penal, encontrado dentro de la bolsa negra la rama de la especie vegetal Cannabis Sativa, que pesaba 1005,8 gramos neto, consistente en ramas y hojas en estado húmedo y 346,2 gramos netos marihuana, consistente en ramas y sumidades floridas húmedas, por lo que por su cantidad no puede estimarse que estuviera destinada a un consumo personal y próximo en el tiempo.

Además, el hallazgo de la droga se produjo en la vía pública, por lo que cabe preguntarse por qué una persona que solo consume portaría en la vía pública tal cantidad de marihuana, considerando únicamente la Cannabis Sativa a granel, 346,2 gramos netos.

En cuanto a que la droga tenía como objetivo el consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo, lo cierto es que el acusado no justificó las razones por la cuales portaba tal cantidad de marihuana, 346,2 gramos netos más la rama de la misma droga, lo que excede un consumo inmediato o próximo en el



tiempo, y el hecho de ser consumidor no obsta a que, además, realice actividades de tráfico. Además, sobre la calidad de la droga, se trataba de sumidades floridas y ramas.

Por su parte el artículo 3° de la Ley N°20.000, establece que para incurrir en dicho delito quien, sin la debida autorización, trafique las sustancias ahí señaladas, ‘...entendiéndose que trafican los que, sin la competente autorización, importan, exportan, transportan, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o porten las referidas sustancias’, y en este caso el acusado mantenía en su poder, en la vía pública, la droga, en la cantidad ya señalada.

Por las razones anteriores, con la prueba presentada, a este Tribunal no se le generó duda en cuanto a la existencia del delito y la responsabilidad del acusado, por lo que solo cabía rechazar la pretensión de la Defensa de dictar sentencia absolutoria”;

3°) Que, en lo concerniente a la infracción denunciada con ocasión del motivo de nulidad deducido de manera principal, cabe indicar que el debido proceso es un derecho asegurado por la Constitución Política de la República y que consiste en que toda decisión de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado y al efecto, el artículo 19 N°3, inciso sexto, confiere al legislador la misión de definir las garantías de un procedimiento racional y justo.

Sobre los presupuestos básicos que tal garantía supone, esta Corte ha señalado que el debido proceso lo constituyen a lo menos un conjunto de garantías que la Constitución Política de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Chile que están en vigor y las leyes les entregan a las partes de la relación procesal, por medio de las cuales se procura que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los tribunales, que sean escuchados, que puedan reclamar cuando no están conformes, que se respeten los procedimientos fijados en la ley y que las sentencias sean debidamente motivadas y fundadas;



4°) Que, de otro lado, en cuanto a las facultades autónomas de actuación que la ley le entrega al personal policial, así como lo referido al respeto del debido proceso, esta Corte Suprema ha señalado reiteradamente que la negativa a admitir prueba ilícita, tiene como fundamento la concepción del proceso como instrumento de resolución jurisdiccional de litigios dentro del ordenamiento jurídico, lo que conduce a que todo acto que infrinja de manera sustancial dicho sistema, debe ser excluido del mismo;

5°) Que, en relación con las normas de procedimiento aplicables al caso concreto, resulta necesario proceder a su análisis a efectos de poder determinar si ellas han sido transgredidas y, en su caso, examinar si dicho quebrantamiento ha significado la vulneración de los derechos fundamentales del acusado, como denunció su defensa;

6°) Que, como se ha consignado en ocasiones anteriores por esta Corte, el Código Procesal Penal regula a lo largo de su normativa, las funciones de la policía en relación con la investigación de hechos punibles y le entrega un cierto nivel de autonomía para desarrollar actuaciones que tiendan al éxito de la investigación. Tal regulación, en todo caso, contempla como regla general que su actuación se encuentra sujeta a la dirección y responsabilidad de los representantes del Ministerio Público o de los jueces (SCS N°s 7.178-2017, de 13 de abril de 2017; 9.167-2017, de 27 de abril de 2017; 20.286-2018, de 1 de octubre de 2018; 28.126-2018, de 13 de diciembre de 2018; y, 13.881-2019, de 25 de julio de 2019).

Es así como el artículo 83 del citado cuerpo normativo, establece expresamente el marco regulatorio de la actuación policial sin orden previa o instrucción particular de los fiscales permitiendo su gestión autónoma para prestar auxilio a la víctima (letra a); practicar la detención en casos de flagrancia conforme a la ley (letra b); resguardar el sitio del suceso con el objeto de facilitar la intervención de personal experto de la policía, impedir la alteración o eliminación de rastros o vestigios del hecho, etcétera,(letra c); identificar testigos y consignar



las declaraciones que ellos presten voluntariamente, tratándose de los casos de las letras b) y c) citadas (letra d); recibir las denuncias del público (letra e) y efectuar las demás actuaciones que dispusieren otros cuerpos legales (letra f). Sólo en las condiciones que establece la letra c) recién citada, el legislador autoriza a los funcionarios de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile a efectuar diligencias autónomas de investigación.

A su vez, los artículos 85 y 86 del Código Procesal Penal, regulan el procedimiento de control de identidad, estableciendo la facultad de los funcionarios policiales para solicitar la identificación de cualquier persona sin orden previa de los fiscales, en los casos fundados en que estimen que exista algún indicio de que se hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta; de que se dispusiere a cometerlo; de que pudiere suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito o falta; en el caso que la persona se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad; facultando para el registro de vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla, procediendo a su detención, sin necesidad de orden judicial, de quienes se sorprenda a propósito del registro, en alguna de las hipótesis del artículo 130 —que describe lo que debe entenderse por situación de flagrancia— así como de quienes, al momento del cotejo, registren orden de aprehensión pendiente;

7º) Que las disposiciones recién reseñadas tratan, entonces, de conciliar una efectiva persecución y pesquisa de los delitos con los derechos y garantías de los ciudadanos, estableciéndose en forma general la actuación subordinada de los entes encargados de la ejecución material de las órdenes de indagación y aseguramiento de evidencias y sujetos de investigación al órgano establecido por ley de la referida tarea, los que, a su vez, actúan conforme a un estatuto no menos regulado —y sometido a control jurisdiccional— en lo referido a las medidas que afecten los derechos constitucionalmente protegidos de los ciudadanos;



8°) Que, a fin de dirimir lo planteado en el recurso, resulta necesario estarse a lo asentado por los jueces del fondo al ponderar las evidencias aportadas a la litis, sin que sea dable que, para tales efectos, esta Corte Suprema, con ocasión del estudio de la causal de nulidad propuesta, intente una nueva valoración de esas probanzas y fije hechos distintos a los determinados por el tribunal del grado, porque ello quebranta de manera evidente las máximas de oralidad, inmediación y bilateralidad de la audiencia, que rigen la incorporación y valoración de la prueba en este sistema procesal penal. Aclarado lo anterior, se procederá al estudio de las protestas fundantes del recurso con arreglo a los hechos que en la decisión se tienen por demostrados;

9°) Que, de la lectura del considerando decimotercero de la sentencia en revisión, referido previamente, el tribunal da por establecido que, ante un control preventivo de identidad —en que el acusado no portaba su cédula de identidad— Olmos Olmos portaba una bolsa en la cual se podía observar, sobresaliendo, una rama de una especie vegetal de características similares a la cannabis sativa. Dicho indicio permitió que el actuar policial transitara hacia un control de identidad investigativo, el cual permitió que los funcionarios policiales pudiesen revisar la referida bolsa, oportunidad en la cual fue hallado el alcaloide incriminado y la planta de marihuana;

10°) Que, en síntesis, la defensa ha cuestionado el actuar de los funcionarios policiales, afirmando que el hecho de portar una bolsa de plástico responde a una conducta neutra que no los habilitaba al registro de las pertenencias del acusado, razón por la que actuaron de manera autónoma en un caso no previsto por la ley, lo que implica que todas las pruebas derivadas de tales diligencias son ilícitas, y, por ende, debieron ser valoradas negativamente por los juzgadores del fondo;

11°) Que lo relevante y capital es que el fallo da por ciertas las circunstancias que objetivamente y de manera plausible, a un tercero observador imparcial, permitían construir un indicio de aquellos a que alude el artículo 85 del



Código Procesal Penal, lo que lleva a descartar la arbitrariedad, abuso o sesgo en el actuar policial, por lo que los jueces del tribunal oral no incurrieron en vicio alguno al aceptar con carácter de lícita la prueba de cargo obtenida por la policía en las referidas circunstancias y que fuera aportada al juicio por el Ministerio Público;

12º) Que, en suma, la actividad policial ha sido desplegada dentro de los márgenes que la ley le confiere, de manera que no se aprecia inobservancia de las normas que el legislador consignó para un procedimiento como el de la especie, con lo que ciertamente no se afectaron las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, y, por consiguiente, el motivo de nulidad en estudio no puede prosperar;

13º) Que, respecto a la primera causal de invalidación subsidiaria, esta Corte ya ha manifestado que toda sentencia criminal debe razonar y exponer los fundamentos en que se apoya, justificar la decisión adoptada, fijar los hechos y establecer el derecho aplicable. El cumplimiento de la obligación de motivación de la decisión significa elaborar una justificación específica de la opción consistente en tener algunos hechos como probados, sobre la base de los elementos de prueba obtenidos en la litis, con las garantías inherentes al juicio oral. Tal deber apunta no sólo a permitir la comprensión de la decisión, sino además a garantizar la actuación racional en el terreno de la determinación de las premisas fácticas del fallo (entre otras, SCS N°s 14.491-2021, de 13 de abril de 2021; y, 92.094-2020, de 14 de septiembre de 2020).

La satisfacción de esta carga posibilita la fiscalización de la actividad jurisdiccional por los tribunales superiores mediante el ejercicio de los recursos procesales. Si el tribunal explica las razones de su resolución es posible controlar si efectivamente la actividad judicial se ha desarrollado dentro de los parámetros de la lógica-racional y la legalidad o si, por el contrario, es el resultado de la arbitrariedad. Por ello, en nuestro ordenamiento jurídico las decisiones judiciales no deben resultar de meros actos de voluntad o ser fruto de simples impresiones



de los jueces, sino que deben ser el corolario de la estimación racional de las probanzas, exteriorizada como una explicación igualmente racional sobre las razones de la decisión de una determinada manera —y no de otra—, explicación que deberá ser comprensible por cualquier tercero, mediante el uso de la razón.

Tal comprensión se ajusta a una noción de racionalidad comunicativa con respecto a la evidencia, por la cual se entiende la valoración de la prueba como el proceso de determinación de la verdad o falsedad de las proposiciones sobre hechos, conforme a las relaciones inferenciales que existen entre ellas y las pruebas disponibles;

14º) Que, al mismo tiempo, la fijación de los hechos y circunstancias que se tuvieren por probadas, favorables o desfavorables al acusado, debe ir precedida de la debida valoración que impone el artículo 297 del código adjetivo. Atendiendo a esta norma, el tribunal debe hacerse cargo de toda la prueba producida, incluso la desestimada, con señalamiento de los medios de prueba, único o plural, por los cuales se dieron por probados los hechos y circunstancias atinentes a la litis;

15º) Que, tal exigencia de fundamentación ha sido debidamente satisfecha por la sentencia que se revisa. En efecto, el fallo extrae conclusiones del análisis de la prueba, como resultado de un proceso valorativo de cada uno de los elementos de convicción rendidos, tanto respecto de los hechos objetivos integrantes del tipo penal atribuido, como de la conducta desplegada por el acusado. El fundamento decimosexto establece de manera clara que la circunstancia de que el acusado hubiese declarado ser consumidor, no resulta óbice para materializar conductas que la ley califica dentro de los verbos rectores del delito de tráfico ilícito de estupefacientes.

En las condiciones expresadas no puede catalogarse como carente de lógica y comprensión el fallo impugnado, como demanda el artículo 342 del Código Procesal Penal, desde que la sentencia entrega los basamentos que conducen a la decisión alcanzada respecto de los delitos pesquisados, fundada en el análisis singular y conjunto de las probanzas producidas, lo cual surge de la



lectura de los considerandos del fallo. Tales consideraciones conducen a una conclusión unívoca, como expresa la sentencia, cuya inteligencia se justifica en virtud de los argumentos explicitados en ella y que no han sido desvirtuados por el recurso, por lo que sólo resta concluir que las impugnaciones formuladas por la defensa dan cuenta de una mera discrepancia sobre la valoración que tribunal asignó a la teoría exculpatoria de la defensa, juicio que el tribunal sustentó suficientemente como se advierte de los motivos transcritos *ut supra*, por lo que las imputaciones relativas a una presunta falencia en el razonamiento no será admitida;

16º) Que, en torno a lo argumentado con ocasión de la segunda causal subsidiaria de invalidación, el motivo decimocuarto descartó la recalificación propuesta por la defensa, toda vez el acusado fue sorprendido en la vía pública portando la cantidad de 346,2 gramos netos de marihuana, al interior de una bolsa plástica, sumado a la presencia de una rama de la misma especie vegetal, lo cual impidió calificar los hechos dentro del tipo penal que establece el artículo 8º de la Ley 20.000, descartándose además —en atención a la cantidad— que la droga estuviese destinada para el consumo personal, exclusivo o próximo en el tiempo por parte del encartado.

De esta forma, lo que se intenta por el recurrente es el establecimiento de hechos diversos a aquellos que fueron asentados de manera soberana por los sentenciadores, resultando inamovibles para esta Corte con ocasión de una causal de derecho estricto, no advirtiéndose en la calificación jurídica el yerro propuesto por el articulista, de forma tal que tampoco podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, a lo dispuesto en los artículos 373 letras a) y b), 374 letra e), 376 y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso deducido por la defensa de Jean Pierre Humberto Olmos Olmos en contra de la sentencia de diecisiete de abril de dos mil veinticinco, pronunciada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, y en contra



el juicio oral que le antecedió en el proceso RUC 2.300.327.345-8, RIT 570-2023, los que, por consiguiente, **no son nulos**.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Llanos.

Nº15.058-2025.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Manuel A. Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R., Sra. María Cristina Gajardo H. y el Abogado Integrante Sr. Eduardo Gandulfo R. No firman los Ministros Sr. Llanos, Sra. Letelier y Sra. Gajardo, no obstante haber estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por estar con feriado legal, el primero; con permiso, la segunda y en comisión de servicios, la tercera. Santiago, 07 de julio de 2025.



En Santiago, a siete de julio de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

